

**Chillán, cuatro de enero de dos mil veinticuatro.**

**VISTO:**

Que en esta causa R.U.C. 22-4-0419301-9, R.I.T. T-88-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, por sentencia de veintisiete de junio de 2023, dictada por la Juez Titular de ese Tribunal doña María Alejandra Ceroni Valenzuela, se rechazó, sin costas, la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, en procedimiento de tutela laboral, como asimismo la indemnización por daño moral por término anticipado, deducida por don **Patricio Alejandro Alfonso Vera Muñoz**, en contra del **MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**, representado por doña Valentina Pradenas Andrade.

En contra del referido fallo, la parte demandante dedujo recurso de nulidad fundándolo en las causales contempladas en los artículos 477 y 478 letra c) del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso por esta Corte, se procedió a conocerlo en la audiencia del día 14 de diciembre último, interviniendo los abogados de ambas partes y quedando la causa en estudio.

**CONSIDERANDO.**

1°.- Que, el recurrente ha invocado en primer término y como causal de nulidad la establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Refiere el recurrente, y como fundamento de su arbitrio, que la sentencia que por este acto se revisa rechaza la tutela de marras, señalando en el considerando décimo tercero, lo siguiente: *“Que la Resolución Exenta RA N°411/2821/2022, de fecha 09 de junio de 2022, indica como fundamento para el termino anticipado de la contrata del actor, que éste fue contratado para ser parte del equipo profesional de confianza de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región del Ñuble, por lo que con motivo del cambio de administración el día 11 de marzo de 2022 y la consecuente renuncia del Secretario Regional Ministerial de Gobierno de la Región del Ñuble, el actor ya no contaba con la confianza de las nuevas autoridades para la realización de labores de asesoría directa al Secretario Regional Ministerial de Gobierno. Así también lo declara en la confesional de la denunciada, recalando que el actor para el gobierno actual, carecía de la confianza de las nuevas autoridades. Resulta importante mencionar nuevamente que el actor fue contratado según indica la*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YMYBXKRZMX

*Resolución Exenta RA N°411/470/2021 precisamente para asesorar autoridades de la época, específicamente para asesorar directamente al Secretario Regional Ministerial, lo que lo hace tener una confianza directa y así poder dar cumplimiento efectivo a los objetivos y productos estratégicos de esta Cartera de Estado”.*

*“De esta forma a juicio de esta sentenciadora se encuentra justificada el término anticipado de la contrata del actor, debido a que es claro que éste desempeñaba funciones de asesor del SEREMI, lo que hace tener una confianza directa, y se encuentra expresamente establecido en la Resolución Exenta RA N°411/470/2021, la que indica que el actor debía realizar “funciones de asesor directo del Secretario Regional Ministerial, lo que lo hace tener una confianza directa y así poder dar cumplimiento efectivo a los objetivos y productos estratégicos de esta Cartera de Estado”, de esta forma al realizarse un cambio de gobierno, los objetivos también son diferentes y requieren de un asesor que mantenga la confianza de la nueva autoridad”.*

Señala el impugnante, y en cuanto a las disposiciones legales infringidas, que en la dictación de la sentencia se vulneraron los artículos 7 y 89 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y artículo 49 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Agrega, en apoyo a su reproche, que la sentenciadora del grado rechaza la tutela dando por justificado el término anticipado de la contrata de su representado, calificando jurídicamente la relación funcionaria que lo ligaba con su empleadora como de confianza exclusiva, en clara contravención a lo dispuesto en el artículo 7° del Estatuto Administrativo.

Aduce que la disposición legal precitada, señala qué cargos son de confianza exclusiva del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento:

- a) Los cargos de la planta de la Presidencia de la República;
- b) En los Ministerios, los secretarios regionales ministeriales y los jefes de división o jefaturas, existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su denominación;
- c) En los servicios público, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación.



Sostiene que de la manera anterior, los cargos de exclusiva confianza sólo deben estar establecidos por ley, y ello con el objeto de proteger la estabilidad en el empleo, de manera que no corresponde calificar jurídicamente como de confianza exclusiva el cargo que desempeña un funcionario no mencionado en dicha norma o en leyes especiales, siendo la estabilidad laboral la regla general, en tanto que la confianza exclusiva es excepcionalísima, requiriéndose al efecto una ley expresa que la establezca, toda vez que no se puede amparar la precariedad laboral.

Señala el recurrente que el artículo 49 de la Ley 18.575, recogiendo el principio de la estabilidad laboral, dispone: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los números 9 y 10 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, entendiéndose por funcionario de exclusiva confianza a aquellos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.

Desde la perspectiva anterior, es posible apreciar que el cargo del actor no era de confianza exclusiva, a diferencia del Seremi, y sólo una ley lo podía calificar de tal, por lo cual la jueza a-quo al determinar que era de confianza exclusiva infringió el artículo 7° y 89 del Estatuto Administrativo, y el 49 de la Ley 18.575.

**2°.-** Que, la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, que la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, se configurará cuando la ley en cuestión se ha aplicado a casos no regulados por la misma; cuando no se ha aplicado a los casos regulados específicamente por ella o cuando, habiéndose aplicado, no lo ha sido en forma correcta, pero en toda estas situaciones deben respetarse los hechos establecidos en la sentencia recurrida, sin que ellos puedan ser alterados en modo alguno, ya que a través de la mencionada causal lo que se persigue es una revisión exclusivamente del derecho aplicado al fallo, pero sin que, por esta vía, se puedan alterar los hechos que han quedado asentados en la sentencia recurrida. De acuerdo a lo anterior lo que debe examinar exclusivamente este Tribunal, es si a los hechos establecidos en el fallo impugnado se les aplicó correctamente el derecho, pero respetando los hechos configurados.



**3°.-** Que, como se señaló precedentemente, tratándose de la causal de errónea aplicación del derecho, el punto básico en esta materia está constituido por los hechos que se han dado por establecidos en la sentencia recurrida, sin que sea procedente tratar de alterarlos por esta vía, ya que las posibilidades de revisión de esta Corte no sólo están determinadas por la naturaleza del recurso deducido, sino que, de modo especial, por la causal que se haga valer, y el motivo de nulidad propuesto en este caso tiene por finalidad exclusiva la de fijar el recto alcance o sentido de la ley y ello debe llevarse a cabo en torno a los hechos que han sido determinados en la sentencia que se impugna y para el recurrente sus capítulos de impugnación han de tener un correlato exacto con los hechos establecidos por el fallo que cuestiona.

**4°.-** Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es advertir que la sentenciadora del grado, con el análisis de la prueba rendida en el juicio, deja establecido como hecho de la causa, el que resulta inamovible, que por medio de la Resolución Exenta RA N°411/470/2021, el actor prestó servicios en calidad de contrata para la Secretaría General Ministerial de Gobierno de la Región de Ñuble desde el 8 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo prorrogada la contrata hasta el 31 de diciembre de 2022, y que mediante Resolución Exenta RA N°411/2821/2022 de 09 de junio de 2022, se puso término anticipado a la contrata del actor, fundado en que no se encuentra beneficiado por el principio de confianza legítima, ya que fue contratado en su oportunidad para ser parte del equipo profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región del Ñuble, para realizar funciones de asesor directo del Secretario Regional Ministerial, y mientras sean necesarios sus servicios, lo que lo hace tener una confianza directa y así poder dar cumplimiento efectivo a los objetivos y productos estratégicos de dicha Cartera de Estado, dejándose asimismo establecido que con motivo del cambio de administración ocurrido el 11 de marzo de 2022, y la consecuente renuncia del Secretario Regional Ministerial de Gobierno de la Región del Ñuble, el actor ya no contaba con la confianza de las nuevas autoridades para la realización de labores de asesoría directa al nuevo Secretario Regional Ministerial de Gobierno, concluyendo la sentenciadora que se encuentra justificado el término anticipado de la contrata del actor, pues al realizarse un cambio de gobierno los objetivos también son diferentes y requieren de un asesor que mantenga la confianza de la nueva autoridad.

**5°.-** Que, el recurrente estima que la juez a-quo ha transgredido las disposiciones legales por él denunciadas en su recurso, al calificar el cargo del denunciante como de exclusiva confianza.



Sin embargo, de la sola lectura de la sentencia es posible apreciar que la sentenciadora efectuó un completo análisis de las funciones desempeñadas por aquel y concluyó, sobre la base de la prueba rendida, que el cago era de exclusiva confianza, siendo importante destacar a este respecto que el tribunal para arribar a dicha conclusión lo hizo en base a la prueba incorporada a la causa, especialmente la documental y testimonial, y al propio decreto de nombramiento de don Patricio Alejandro Alfonso Vera Muñoz, el cual no indica la o las funciones que éste debía cumplir, señalando únicamente el escalafón y la escala de sueldo a la cual se adscribe el cargo.

**6°.-** Que, así las cosas, del tenor del recurso es posible advertir que lo que impugna el recurrente es la valoración efectuada por la juez respecto de la prueba rendida, cuestión ajena a la causal invocada, por lo que el presente capítulo de nulidad deberá desestimarse, tanto porque se funda en una distinta apreciación de la prueba rendida y no se explica de qué manera las normas que invoca habrían sido transgredidas, como asimismo, porque el arbitrio se construye en oposición a los hechos establecidos por la juez a-quo.

**7°.-** Que, en subsidio de la causal anterior, interpuso la prevista en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, “Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

Expresa el recurrente, y como basamento de este capítulo de nulidad, que la sentenciadora describió acertadamente los hechos que se han tenido por acreditados en el juicio, pero sus conclusiones no son concordantes y por la vía de una interpretación sin fundamentos, concluye calificando jurídicamente en forma errónea la justificación del término anticipado de la contrata del actor, que es un hecho del todo excepcional. Existe una clara contradicción entre conclusiones fácticas, los hechos acreditados por la sentenciadora y la calificación jurídica de éstos, tan acertadamente descritos, debido a que como se indicó, el término de contrata de su representado tuvo como motivación la pérdida de la confianza por la llegada de las nuevas autoridades, por lo que, a criterio del tribunal, dicha medida resulta justificada y por lo tanto no discriminatoria.

Aduce asimismo que el fallo impugnado expresa con mediana claridad que, el término de la contrata del actor se debió a la pérdida de confianza respecto de las nuevas autoridades, indicando que lo anterior se expresa en la resolución de término anticipado cuando se señala “No cambia lo razonado el hecho que el actor sea periodista, realizando actividades de comunicación, ya que



están dirigidas a asesorar a la autoridad de la época”. Es decir, deja por establecido que se pierde la confianza en el actor por haber asesorado al Seremi durante el gobierno anterior, que era de otro color político al gobierno actual, así como también el actor, sin importar su capacidad e idoneidad profesional.

Señala, asimismo, que la persona que ejerce el cargo de Seremi lo hace transitoriamente, mientras dura en el cargo, por lo cual debe entenderse que su representado asesoraba al Seremi, independiente de quien ejerciera el cargo, ya que éste no es de izquierda ni de derecha, sino que está consagrado en la ley con carácter permanente, por lo cual al calificarse como de exclusiva confianza un cargo sólo por temas políticos infringe el artículo 2° y 485 del Código del Trabajo, los cuales proscriben todo tipo de discriminación y establece el procedimiento de tutela para sancionar tales vulneraciones. Queda absolutamente claro que el actor fue discriminado políticamente, por asesorar a un Seremi de un gobierno de tendencia política distinta al actual.

Desde otra perspectiva, aduce que de conformidad con el artículo 7° del Estatuto Administrativo y 49 de la Ley 18.575, sólo la ley establece cargo de confianza exclusiva, no siendo el cargo del actor uno de ellos, de manera que al habersele catalogado como de confianza exclusiva, se aplicaron erróneamente las normas antes señaladas.

Finalmente, en razón de lo anterior, pide se anule el fallo por la vía de alterar la calificación jurídica de los hechos, en términos que se concluya que las circunstancias fácticas, acreditadas con la prueba rendida, constituyen razones suficientes para dar por demostrado que el cargo del actor no era de confianza exclusiva, y que por ende se le puso término anticipado a su contrata siendo discriminado políticamente.

8°.- Que, en lo que respecta a esta causal de nulidad, es dable señalar, como lo ha precisado la jurisprudencia, que la “calificación jurídica” es una cuestión de derecho, porque se refiere, en definitiva, a la determinación de si un hecho establecido se encuentra regulado por alguna norma legal que soluciona el asunto. Sin embargo, esta causal tiene un ámbito de actuación propio y quien intenta este motivo de nulidad debe, para configurar el vicio, exponer el error en que habría incurrido el sentenciador, pero no en cuanto a la actividad de subsunción de los hechos a una norma legal determinada, sino el error en que habría incurrido el juez al precisar, conforme a los hechos asentados, las nociones o conceptos jurídicos indeterminados de las reglas denunciadas y aplicadas a una de las múltiples situaciones que aporta la realidad.



En consecuencia, la causal de la letra c) del artículo 478 del Estatuto Laboral, sólo resulta pertinente cuando el yerro cometido en el fallo se expresa en la definición judicial que antecede a la aplicación misma de la ley, y siempre que los antecedentes fácticos no merezcan alteración.

**9°.-** Que, en la especie, los argumentos expresados por el recurrente en su recurso se basan, en definitiva, en la infracción a los artículos 7° del Estatuto Administrativo; 49 de la Ley 18.575 y 2° y 285 del Código del Trabajo en los que habría incurrido la sentenciadora, al concluir que el cargo que desempeñaba su representado era de exclusiva confianza, alegación ésta que corresponde más bien a otra causal, esto es, a la prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, más no a la que interpuso, razón por la cual este capítulo de nulidad será igualmente rechazado.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 477, 478 letra c), 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara: Que **se rechaza, sin costas**, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Nicolás Quintana Escalona, en representación de don **Patricio Alejandro Alfonso Vera Muñoz**, en contra de la sentencia definitiva de veintisiete de junio último, dictada por la Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, doña María Alejandra Ceroni Valenzuela, en estos autos R.U.C. 22-4-0419301-9 R.I.T. T-88-2022, la cual, en consecuencia, no es nula.

Regístrese, notifíquese y devuélvase con su custodia.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

No firma el fiscal judicial señor Vigueras, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

**R.I.C. 224-2023-LABORAL COBRANZA.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YMYBXKRZMX

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Guillermo Alamiro Arcos S. y Abogado Integrante Juan De La Hoz F. Chillan, cuatro de enero de dos mil veinticuatro.

En Chillan, a cuatro de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YMYBXKRZMX